

28 de mayo de 2009

Actualización regional:

AFRICA

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A enero-abril de 2009

Documento embargado hasta las 06.01 horas Península y Baleares del 28 de mayo de 2009

INSEGURIDAD

En la **República Democrática del Congo**, el panorama político y militar cambió radicalmente en enero cuando el ejército ruandés entró en Kivu Septentrional a invitación del gobierno para unirse al ejército congoleño en una ofensiva contra las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (*Forces Démocratiques de Libération du Rwanda, FDLR*), grupo insurgente ruandés. La operación conjunta duró hasta el 25 de febrero, fecha en que se retiraron las fuerzas armadas ruandesas. Al parecer, el primer objetivo de esta operación era derrocar a Laurent Nkunda, dirigente del grupo armado Consejo Nacional para la Defensa del Pueblo (*Conseil National pour la Défense du Peuple, CNDP*). A principios de enero, el jefe militar del CNDP, Bosco Ntaganda declaró que había depuesto a Laurent Nkunda de su cargo. Este último fue detenido por el ejército ruandés el 22 de enero y, desde entonces, permanece recluido en un lugar secreto de Ruanda. Por su parte, Bosco Ntaganda es un fugitivo de la justicia internacional. En agosto de 2006, la Corte Penal Internacional (CPI) había dictado una orden de detención contra él por crímenes de guerra consistentes en reclutar a niños y niñas menores de 15 y hacerlos participar en las hostilidades. El gobierno de la República Democrática del Congo ha anunciado que solicitará la extradición de Laurent Nkunda, pero se ha negado a detener a Bosco Ntaganda y entregarlo a la CPI.

La operación militar conjunta contra las FDLR no obtuvo resultados concluyentes, pero las víctimas civiles sí han sido numerosas. Según parece, las FDLR han represaliado a la población civil en varias zonas de Kivu Septentrional, por ejemplo, violando y quemando a personas vivas en sus casas. Los movimientos del ejército congoleño también han ido acompañados de graves vulneraciones de derechos humanos, como violaciones y otros actos de tortura. La intervención del ejército ruandés provocó una crisis parlamentaria en la República Democrática del Congo, que llevó a la dimisión, bajo presión, del presidente de la Asamblea Nacional, Vital Kamerhe. En marzo, los servicios de inteligencia detuvieron arbitrariamente y golpearon con brutalidad a activistas de derechos humanos que protestaban por los intentos de desbanca a Vital Kamerhe.

Continúa la ofensiva militar del ejército congoleño contra las FDLR, que ahora cuenta con el apoyo de la misión de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUC) y se extenderá a Kivu Meridional, por lo que se teme que también empeore drásticamente la situación humanitaria y de derechos humanos en esa provincia. La MONUC todavía no ha recibido el refuerzo de más de 3.000 efectivos que el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en noviembre de 2008, pese a que se ha prometido el envío de tropas de pacificación adicionales.

A principios de 2009 se deterioró la situación de derechos humanos en **Sudán** (Darfur): se lanzaron varios ataques contra pueblos y contra la misión conjunta de la ONU y la Unión Africana en Darfur (UNAMID), lo que conllevó más desplazamientos.

El 4 de marzo, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI emitió una orden de detención contra el presidente sudanés Omar el Bashir por crímenes de guerra y

Por los derechos humanos en todo el mundo.
Premio Nóbel de la Paz 1977.

DOCUMENTACIÓN

AMNISTÍA
INTERNACIONAL 

AMNISTÍA INTERNACIONAL
CATALUNYA
C/ Alfons XII, nº 19-21,
Ppal - 1º
08006 BARCELONA

T: +34 93 209 35 36
F: +34 93 200 77 57
info@amnistiacatalunya.org
www.amnistiacatalunya.org

crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Sudán revocó inmediatamente los permisos de 13 organizaciones internacionales de ayuda humanitaria y clausuró tres organizaciones nacionales. Los cierres se efectuaron sin notificación previa y el gobierno no autorizó un periodo de transición destinado a garantizar la continuidad del suministro de ayuda de emergencia en Darfur y en otras partes del norte de Sudán.

El cierre de las ONG en Sudán respondía a la misma estrategia que la campaña de represión contra activistas de derechos humanos. Muchos se vieron obligados a abandonar el país y otros fueron silenciados por el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional del gobierno. Aumentaron las violaciones del derecho a la libertad de expresión y reunión.

En abril, los tribunales especiales de Jartum condenaron a muerte a otros 32 presuntos miembros del grupo armado de oposición Movimiento Justicia e Igualdad (JEM). Según abogados locales y activistas de derechos humanos, los juicios contra estos hombres fueron manifiestamente injustos: muchos no tuvieron acceso a representación letrada hasta que el juicio ya había comenzado; según informes, los torturaron y les infligieron otros malos tratos y muchos confesaron mediante tortura.

El 11 de abril fueron ejecutadas nueve personas acusadas de asesinar al destacado periodista Mohamed Taha en 2006. El juicio no respetó las normas internacionales sobre garantías procesales y las confesiones fueron extraídas con tortura.

Las tropas etíopes se retiraron de **Somalia** a principios de 2009 y el Parlamento Federal de Transición fue ampliado con el fin de incluir a representantes de la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia-Facción de Yibuti (ARS-Yibuti). El 30 de enero, el Parlamento eligió a Sheij Sharif Ahmed, líder de ARS-Yibuti, como presidente del Gobierno Federal de Transición.

Numerosos grupos armados, entre ellos facciones de Al Shabab, prometieron seguir luchando contra el nuevo Gobierno Federal de Transición y la reducida misión de la Unión Africana (AMISOM) con base en Mogadiscio. Los grupos armados controlaban la inmensa mayoría del centro y sur de Somalia. Aumentaron los ataques contra la AMISOM y el 22 de febrero murieron 11 soldados burundeses en un ataque suicida dirigido contra una base de esta fuerza internacional. El ministro del Interior del nuevo gobierno sobrevivió a un atentado con bomba perpetrado el 26 de marzo en una calle de Mogadiscio.

La población civil somalí seguía llevándose la peor parte del conflicto armado. Los enfrentamientos en la región de Galgadud ocasionaron el desplazamiento de más de 100.000 personas entre finales de diciembre de 2008 y enero de 2009. Tras los ataques lanzados en febrero por grupos armados contra el Gobierno Federal de Transición y las fuerzas de la AMISOM en Mogadiscio, decenas de civiles resultaron muertos o heridos por disparos y bombas de mortero. El 25 de febrero, proyectiles de mortero alcanzaron una escuela coránica de Tawfiq, en el norte de Mogadiscio, y causaron la muerte de un niño y heridas a otros siete, uno de los cuales murió posteriormente. Todavía no se han hecho públicos los resultados de una investigación interna de la AMISOM sobre denuncias de que el 2 de febrero soldados de la AMISOM abrieron fuego indiscriminadamente y acabaron con la vida de varios civiles.

Hubo al menos cuatro agresiones físicas contra periodistas; dos de ellas tuvieron consecuencias mortales y parecieron ser homicidios selectivos. Milicias Al-Shabab detuvieron brevemente a periodistas en la localidad de Baidoa, al parecer porque no consideraban su labor informativa lo bastante favorable. Al menos dos trabajadores humanitarios fueron víctimas de homicidio en 2009 y, a fecha de 5 de mayo de 2009, varios cooperantes y periodistas permanecían como rehenes, por lo que se restringía la entrega de ayuda humanitaria a unos 3,25 millones de civiles en situación de indigencia.



En la esfera internacional, la atención se centró principalmente en el aumento de la piratería en las costas de Somalia. El secretario general de la ONU propuso un enfoque gradual para el despliegue potencial de una fuerza de la ONU en Somalia y para ello el primer paso era que la ONU brindase apoyo a la AMISOM. El 23 de abril, donantes internacionales prometieron 213 millones de dólares estadounidenses para financiar a los órganos de seguridad somalíes y a la AMISOM.

PENA DE MUERTE

En **Ghana**, el presidente saliente John Kufuor conmutó todas las condenas a muerte el último día de su mandato. La medida afectó a unas 105 personas en espera de ejecución, incluidas 3 mujeres. En **Zambia**, el presidente Rupiah Banda conmutó en enero las condenas a muerte de 53 presos por penas de prisión.

El nuevo Código Penal promulgado en **Burundi** en abril ha abolido la pena de muerte, pero penaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.

VOCES DESOÍDAS Y SILENCIADAS

El 6 de enero, el Parlamento de **Etiopía** aprobó la Ley de Proclamación de Organizaciones Benéficas y Sociedades que penaliza las actividades de derechos humanos de ONG extranjeras y de organizaciones etíopes que reciban más del 10 por ciento de la financiación de fuera del país; impone penas desproporcionadas por infracciones administrativas menores de la ley y permite la injerencia del gobierno en la administración y gestión de las organizaciones de la sociedad civil. Birtukan Mideksa, abogada y dirigente del Partido Unidad por la Democracia y la Justicia (UDJ) permanece recluida después de que autoridades gubernamentales hubieran revocado su indulto en 2007 y hubieran restablecido la cadena perpetua que se le había impuesto anteriormente. Amnistía Internacional la considera presa de conciencia.

En **Mauritania**, las fuerzas de seguridad reprimieron varias manifestaciones pacíficas. En abril se sofocaron violentamente dos manifestaciones en las que participaban representantes de partidos políticos y otros miembros de la sociedad civil para protestar por el calendario electoral impuesto por las autoridades que se hicieron con el poder tras el golpe de Estado militar de agosto de 2008.

En febrero, Morgan Tsvangirai del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), fue investido primer ministro del nuevo gobierno de unidad de **Zimbabue**. Su toma de posesión tuvo lugar tras meses de disputas por la asignación de ministerios desde que la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) y las dos facciones del MDC firmaron el Acuerdo Político Global en septiembre de 2008.

De los 23 activistas políticos y de derechos humanos que sufrieron desaparición forzada y luego fueron recluidos por la policía entre octubre y diciembre de 2008, todos menos tres obtuvieron la libertad bajo fianza en febrero y marzo. Fueron presuntamente torturados bajo custodia y algunos todavía reciben tratamiento. A principios de mayo se revocó la fianza de 18 de ellos, que volvieron a ser brevemente detenidos.

PRIVACIÓN

Continuaron los desalojos forzosos en **Nigeria** a principios de 2009. En Port Harcourt, la capital del estado de Rivers y la ciudad más poblada del delta del Níger se llevaron a cabo desalojos forzosos a gran escala pese a que el gobierno del estado había prometido que no desalojaría a más personas por la fuerza. Miles de personas perdieron sus hogares y a algunas, según los informes, se les pidieron sobornos para evitar que se demolieran sus propiedades. Se destruyeron casas, tiendas, hoteles, escuelas, hospitales, iglesias y morgues. Si bien se han pagado algunas

indemnizaciones a propietarios, los mecanismos de indemnización y realojo de inquilinos son inadecuados o inexistentes.

En febrero, la comunidad docente de **Zimbabue** puso fin a la huelga que mantenía desde septiembre de 2008 y volvió al trabajo. Sin embargo, la educación estatal seguía asediada por graves problemas: profesores de Mashonaland Central denunciaron haber sido objeto de hostigamiento e intimidación por parte de simpatizantes de la ZANU-PF, las tasas escolares eran inasequibles para la gran mayoría del alumnado, las escuelas carecían de dotación y material docente y la cuestión del salario del profesorado seguía sin resolverse.

OTRAS NOVEDADES

En febrero, el presidente de **Togo** firmó un decreto para crear una comisión de la verdad, la justicia y la reconciliación. El decreto adolece de varias deficiencias respecto al mandato, la autoridad, la composición y los recursos de la comisión, las garantías de protección de testigos y los remedios que puede recomendar.

En **Senegal**, el Tribunal de Apelación de Dakar liberó en abril a nueve hombres condenados a ocho años de prisión por "conducta indecente y actos contra natura". Tras su puesta en libertad, algunos medios de comunicación y ciertos grupos islámicos difundieron declaraciones homófobas. En marzo, el presidente senegalés Abdoulaye Wade indultó a 19 personas declaradas culpables de delitos relacionados con las manifestaciones violentas que tuvieron lugar en la localidad sudoriental de Kedugú en diciembre de 2008. En ambos casos, Amnistía Internacional recibió información de que los detenidos habían sido torturados en la detención previa al juicio y obligados a confesar mediante coacción.

En **Guinea** se detuvo en abril a un grupo de más de 20 soldados y se los recluyó sin cargos ni juicio en la isla de Kassa, fuera de Conakry. Nueve oficiales arrestados en diciembre tras el golpe de Estado y la muerte del presidente Lansana Conté seguían recluidos sin cargos ni juicio en un cuartel militar de Conakry.

En abril, un grupo que se autodenomina Organización Al Qaeda en el Magreb Islámico liberó en **Mali** a varias personas, entre ellas, a dos diplomáticos canadienses –el enviado especial de la ONU a Níger, Robert Fowler, y su asistente Louis Gay– que habían sido secuestrados en **Níger** en diciembre de 2008. En mayo, el Movimiento del Pueblo Nigerino por la Justicia (*Mouvement des Nigériens pour la Justice, MNJ*), grupo armado de oposición dirigido por tuaregs, dejó en libertad a su último rehén, capturado en 2007 en Níger. Según los informes, el MNJ había decidido en abril deponer las armas y entablar un diálogo con el gobierno.

En abril, un grupo de expertos de la ONU expresó preocupación por la violación del embargo de armas impuesto por la ONU a **Costa de Marfil** y subrayó que el número de armas que circulaban en el país iba en aumento.

/// FIN

Departament de comunicació d'Amnistia Internacional Catalunya

Cèlia Ramon Wyser.

Tel. 93.209.35.36 (ext.2) o 690.81.44.11

cramon@amnistiacatalunya.org

Documents i comunicats de premsa

www.amnistiacatalunya.org; www.es.amnesty.org